

*Análisis de las novedades de la Ley Orgánica 1/2025, de  
2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del  
Servicio Público de Justicia en la jurisdicción social.*

*Suscrito por  
Departamento jurídico- Laboral,  
Luquez Asociados.*

*Sabadell, abril de 2025*

A continuación, se procede a analizar el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el cual modifica, la ley reguladora de la jurisdicción social.

**Entrada en vigor a los tres meses de su publicación, y por tanto, a partir del 03/04/2025.**

**Se procede a analizar el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, mediante el cual se modifica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.**

### **I- PREPARACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA**

<p>ANTERIOR REDACCION art 90 LRJS</p>
<p>3. Podrán asimismo solicitar, al menos con <b>cinco días</b> de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días.</p>
<p>ACTUAL REDACCION art 90 LRJS</p>
<p>«3. Podrán asimismo solicitar, al menos <b>con diez días</b> de antelación a la fecha del juicio, diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio»</p>

Es importante recalcar que la ley 1/2025 otorga un plazo más corto para solicitar y presentar la prueba digital, antes el plazo que se admitía era hasta de 5 días antes de la fecha del juicio, actualmente, con esta reforma, se disponen de 5 días menos de plazo, puesto que ahora deberán de haberse efectuado mínimo con 10 días de antelación al juicio.

## II- INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

ANTERIOR REDACCION 196.1 y 210.1

196.1. El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, **con tantas copias cuantas sean las partes recurridas.**

210.1. El escrito de formalización se presentará ante la Sala que dictó la resolución impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no indicarse otra cosa, asumirá desde ese momento la representación de la parte en el recurso, **con tantas copias como partes recurridas** y designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica, con los efectos del apartado 2 del artículo 53

ACTUAL REDACCION

«196.1. El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el juzgado que dictó la resolución impugnada»

«1. El escrito de formalización se presentará ante la Sala que dictó la resolución impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no indicarse otra cosa, asumirá desde ese momento la representación de la parte en el recurso, designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica, con los efectos del apartado 2 del artículo 53»

Como el objetivo principal de la ley de eficiencia del servicio público de justicia es el de reducir los plazos de espera que pueden generarse en los juzgados y otros entes de jurisdicción pública, podemos ver una medida común en la mayoría de redacción de las modificaciones, pretenden una mayor digitalización de los procedimientos para que se agilicen los trámites.

La modificación más repetida de esta reforma es la de eliminar la presentación de tantas copias de las demandas como partes recurridas. He tomado como ejemplo el artículo 196.1 y 210.1, aunque muchos más se han visto afectados por esta nueva medida de presentación de escritos.

ANTERIOR REDACCIÓN art 221

1. El recurso se preparará mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia de suplicación, **con tantas copias como partes recurridas** y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53

ACTUAL REDACCION

«1. El recurso se preparará mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia de suplicación, y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53».

Se añade:

**«c) Exponer, de manera sucinta, las razones por las que la cuestión suscitada posee interés casacional objetivo».**

Con esta reforma se añade un apartado al artículo 221 que trata de la forma y contenido del escrito de preparación del recurso, podemos ver qué deberá ahora de aportarse en la demanda, a parte de los requisitos anteriores, una nueva justificación de la motivación de presentación del recurso, el interés casacional. Serán entonces los siguientes apartados los pertinentes en la interposición del recurso:

221. 2. El escrito de preparación deberá estar firmado por abogado, acreditando la representación de la parte de no constar previamente en las actuaciones, y expresará el propósito de la parte de formalizar el recurso, con exposición sucinta de la **conurrencia de los requisitos exigidos**. El escrito deberá

a) Exponer cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos.

b) Hacer referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción.

c) Exponer, de manera sucinta, las razones por las que la cuestión suscitada **posee interés casacional objetivo**.

Asimismo, junto con la nueva obligación de justificar el interés casacional, por otro lado, la falta de éste será una nueva causa de inadmisión del recurso, previsto en el artículo 225.4: **“Son causas de inadmisión f) la falta de interés casacional objetivo”**

### III- COSTAS

Promoción de la mediación, condena en costas artículo 7.4 de la LO
4. Si se iniciara un proceso judicial con el mismo objeto que el de la previa actividad negociadora intentada sin acuerdo, los tribunales deberán tener en consideración la colaboración de las partes respecto a la solución consensuada y el eventual abuso del servicio público de Justicia al pronunciarse sobre las costas o en su tasación, y asimismo para la imposición de multas o sanciones previstas, todo ello en los términos establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Si se emprende un procedimiento legal tras un intento de negociación infructuoso, los juzgados deberán considerar la cooperación de las partes en la búsqueda de una resolución pactada. Si una parte **rechaza sin razón alguna a participar en un MASC**, podrá ser sentenciada al abono de las **costas**, incluso si la demanda es estimada en parte.

La LO 1/2025 establece la noción de abuso del servicio público de justicia, que se caracteriza por el **uso irresponsable del derecho a acceder a los tribunales** cuando se hubiese podido alcanzar una resolución acordada. Este principio, todavía en proceso de definición jurisprudencial, busca prevenir la instauración de procesos con propósitos ilícitos, como la obtención de sentencias en costas.

“Artículo 394.1 LEC: 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

No obstante, cuando la participación en un medio de solución de conflictos sea legalmente preceptiva, o se hubiere acordado, previa conformidad de las partes, por el juez, la jueza o el tribunal o el letrado o la letrada de la Administración de Justicia durante el curso del proceso, **no habrá**

**pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en un medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente convocado.”**

En caso de estimación total de la demanda, no habrá pronunciamiento de costas a favor de la parte que se haya negado a participar en un MASC sin justa causa.

“Artículo 394.2 LEC: 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, **cada parte abonará las costas causadas a su instancia** y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

No obstante, **si alguna de las partes no hubiere acudido**, sin causa que lo justifique, a un medio adecuado de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el juez, la jueza o el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia durante el proceso, **se le podrá condenar al pago de las costas**, en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea parcial.”

En caso de estimación parcial, se podrá condenar en costas a la parte que no haya acudido a un MASC cuando sea legalmente preceptivo o así lo haya acordado el juez.

“Artículo 394.4 LEC: 4. Si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora previa tendente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de Justicia”

Si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora previa rehúsa intervenir, la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de justicia.

Art 22 (veintisiete) LO por el que se modifica el artículo 394 la LEC

394. 3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 24.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.

Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Cuando la parte beneficiada en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, las mismas deberán ser abonadas a las personas profesionales que se hayan designado para su representación y dirección jurídica, que estarán obligadas a devolver las cantidades eventualmente percibidas con

cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. A tales efectos, se comunicará por la Oficina judicial a los colegios profesionales correspondientes dicha circunstancia.

Se produce un aumento del límite de las costas: El límite para las reclamaciones inestimables se aumenta a 24. 000 euros, en lugar de los 18. 000 euros antes presentes. Esto implica que, en los casos con cuantía indeterminada, la parte que pierda sólo tendrá que pagar hasta 8. 000 euros, en comparación con los 6. 000 euros actuales.

Costas en situaciones de asistencia jurídica gratuita: Se especifica que, para quienes tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, los costos deben ser pagados a los profesionales, no al cliente. Además, hay obligación de devolver el dinero recibido de fondos públicos.

Eliminación de la obligación de comparecer en casos de satisfacción procesal: Se quita la necesidad de que las partes presenten comparecencia en situaciones de satisfacción procesal o falta sobrevenida de objeto, permitiendo que el tribunal decida mediante un auto.

Eliminación de la condena en costas en incidentes de impugnación: Se elimina la condena en costas en incidentes donde se impugnan los costos por ser excesivos, a menos que haya un abuso del uso del servicio público de justicia.

#### IV- ACTOS DE CONCILIACION

ANTERIOR REDACCION art 83

3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

ACTUAL REDACCION art 83

«3. La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía y sin perjuicio de la sanción que, por esta circunstancia, se podrá imponer en sentencia en los términos establecidos en el artículo 97.3».

Con esta nueva redacción se pueden imponer las sanciones que se prevén en el artículo 97.3 y 66.3 cuando no comparezca el demandado a la conciliación.

97.3 La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, **al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, **así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad**. También motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66.

66.3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal **impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios**, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación

ANTERIOR REDACCION art 84

1. El secretario judicial intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las



actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al secretario judicial la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes **antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio**. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.

La conciliación alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial.

3. En caso de no haber avenencia ante el secretario judicial y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa

ACTUAL REDACCIÓN art 84

«1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al letrado letrada de la Administración de Justicia la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes **antes del día señalado para el acto del juicio, de haberse señalado conciliación anticipada**, o en la misma fecha del juicio de tratarse **de conciliación y juicio señalados sucesivamente**. A tal efecto las partes podrán anticipar **la conciliación por vía telemática**.

**Cuando el acuerdo venga firmado digitalmente por todas las partes, se dictará decreto en el plazo máximo de tres días. En su defecto, y para su posterior ratificación y firma, se citará a las partes a comparecencia en un plazo máximo de cinco días. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.**

La conciliación alcanzada ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y los acuerdos logrados entre las partes y aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial»

«3. En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso,

alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez, la jueza o el tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.

**De celebrarse la conciliación anticipada prevista en el artículo 82 y resultar sin acuerdo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dejará constancia en el acta de los aspectos controvertidos que hayan impedido el mismo y, de concurrir cuestiones procesales que pudieran suscitar la suspensión del acto del juicio, tales como la existencia de terceros que deban ser llamados al procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los intervinientes, advertirá a las partes en los términos establecidos en el artículo 81. »**

Como ya se ha mencionado, esta ley pretende la agilización de los procedimientos y trata de promover que se efectúen de forma más digital, se prevé actualmente la posibilidad de señalarse la conciliación anticipada y de presentarla digitalmente para agilizar el proceso en el juicio, ya que no deberán de celebrarse ambas actuaciones de forma sucesiva. Cuando la conciliación se presente firmada digitalmente se podrá dictar decreto en un plazo de 3 días. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.

En el apartado tercero se incluye un párrafo que esclarece como se procederá cuando la conciliación sea sin acuerdo; se dejará constancia en el acta de los aspectos controvertidos que hayan impedido el mismo y, de concurrir cuestiones procesales que pudieran suscitar la suspensión del acto del juicio, tales como la existencia de terceros que deban ser llamados al procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los intervinientes,

## **V- EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR**

**Disposición final vigesimosexta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.**

ANTERIOR REDACCIÓN art 50

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

ACTUAL REDACCION art 50

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere **en quince días la fecha fijada para el abono del salario**, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, **en el período de un año, tres mensualidades completas de salario**, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario **durante seis meses, aún no consecutivos**.

Se esclarece con esta nueva aportación al artículo el plazo que se considerará que hay retraso en el abono del salario. Siendo entonces retraso del pago del salario, cuando se tarden más de 15 días de la fecha pactada del abono de 3 mensualidades completas no consecutivas o cuando se adeuden 6 meses no consecutivos. Esto es sin perjuicio a que el juez pueda considerar otra valoración.

ANTERIOR REDACCIÓN b) del apartado 4 del artículo 53 y b) del apartado 5 del artículo 55

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por

<p>el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral</p>
<p>ACTUAL REDACCIÓN art 53.4.B y 55.5.B</p>
<p>«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, <b>o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8</b> o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.»</p> <p>«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); <b>el de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8</b> o la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.»</p>

Se añaden como causas de nulidad de la decisión extintiva del artículo 53 cuando suceda la adaptación de jornada prevista en el artículo 34.8, ya que se consideran que son discriminatorias, o prohibidas en la Constitución o en la ley o que se puede haber producido violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

34.8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, **para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral**. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud **hasta que los hijos o hijas cumplan doce años**.

Asimismo, tendrán ese derecho aquellas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e **hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como de otras personas dependientes cuando**, en este último caso, convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, **accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos**, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.

En la negociación colectiva se podrán establecer, con respeto a lo dispuesto en este apartado, los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo.

Así como, según el artículo 55 se añade como motivo de nulidad del despido, que el móvil del despido fuera a raíz de la conciliación del 34.8, o en el caso en que el trabajador estuviera usando el apartado B) del artículo 37 “ Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.”

Este es nuestro informe, que, como siempre, sometemos a gustoso criterio a cualesquiera otros mejor fundados en Derecho, y que damos y firmamos en Sabadell, a 4 de abril de 2025.

Departamento Jurídico-Laboral